

LA COLUMNA DE...



**MARCELA RUIZ-
TAGLE O**
 ECONOMISTA

Infraestructura pública: el desafío no es solo invertir

En cada ciclo electoral, los mercados observan con atención los énfasis de las candidaturas. Aunque en Chile aún estamos en la fase inicial de un nuevo proceso presidencial, hay un diagnóstico compartido: el bajo crecimiento, el deterioro fiscal y el desempleo hacen urgente reactivar la inversión. A esto se suma un entorno internacional volátil, que refuerza la necesidad de dinamizar y fortalecer el motor interno.

Sin embargo, aunque aumentar la inversión es esencial, ello no es suficiente para incidir en el crecimiento económico en el corto plazo. También se requiere asegurar y agilizar la gestión de los proyectos calendarizados, para que sean ejecutados en las condiciones y plazos originalmente previstos. De acuerdo con la Corporación de Bienes de Capital (CBC), el stock de inversión quinquenal se mantiene, por cuarto trimestre consecutivo, sobre el promedio de los últimos cinco años y ronda el 20% del PIB. El impulso actual está liderado por los sectores de minería, energía e infraestructura pública. Y es en este último donde enfrentamos los mayores desafíos. La experiencia reciente en hospitales, rutas y embalses –con y sin concesiones– confirma que para su éxito no basta con asignar recursos: se requiere capacidad técnica, planificación rigurosa y una gestión moderna.

En el caso de los hospitales públicos, los retrasos han sido persistentes. La falta de alineamiento entre el diseño licitado y los programas médico-arquitectónicos, como ocurrió en La Serena, la necesidad de renegociar contratos por hallazgos arqueológicos, como en Ñuble y Buin-Paine, o incumplimientos contractuales, presupuestarios y de fiscalización, como se evidenció en el caso de Linares, son síntomas de una debilidad estructural: la ausencia de gobernanza técnica anticipatoria y coordinada. Y no se trata solo del sector salud. Problemas administrativos, mala coordinación interinstitucional o escasa ingeniería básica también afectan a concesiones viales, portuarias y energéticas. Cuando estos riesgos no se prevén o se subestiman, el Estado termina enfrentando paralizaciones, arbitrajes y sobrecostos, mientras que los ciudadanos y las empresas deben asumir un déficit de servicios que afecta su calidad de vida y productividad.

¿Cómo avanzar? La OCDE y el BID han entregado diversas recomendaciones al país en esta materia, algunas de estas son: fortalecer unidades técnicas especializadas –como las agencias PPP de Reino Unido o Canadá–; establecer protocolos nacionales estandarizados de gestión de riesgos y contingencias; crear marcos de acción rápida para eventos inesperados; o modernizar contratos con cláusulas de resolución técnica temprana, vinculante y con sistemas de seguimiento digital. ¿Por qué no se han implementado? La inversión prevista es una oportunidad y también una necesidad para impulsar el crecimiento, pero si no reformamos cómo se diseña, se ejecuta y se resuelve la infraestructura pública, corremos el riesgo de transformar ese impulso en frustración y desconfianza institucional, lo que debiese importarle a todos los candidatos presidenciales, sin excepción.

“No basta con asignar recursos: se requiere capacidad técnica, planificación rigurosa y una gestión moderna”.